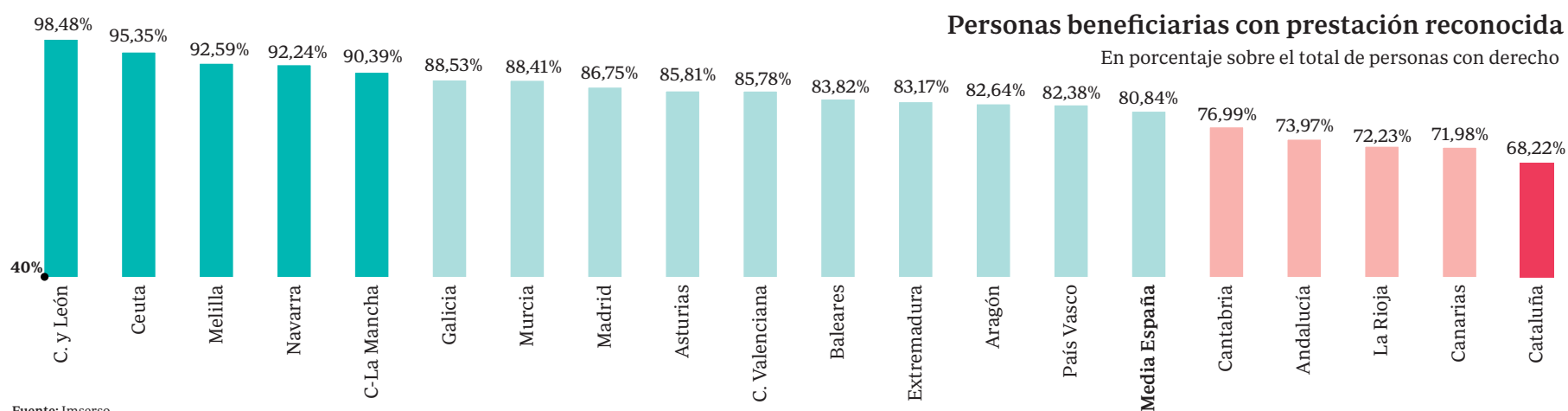


CERCA DE 75.000 CATALANES, EN



«La Generalitat de Cataluña abandona a sus mayores»

► El Observatorio de la Dependencia llama la atención al Govern por la lista de espera más alta y la menor cobertura del país

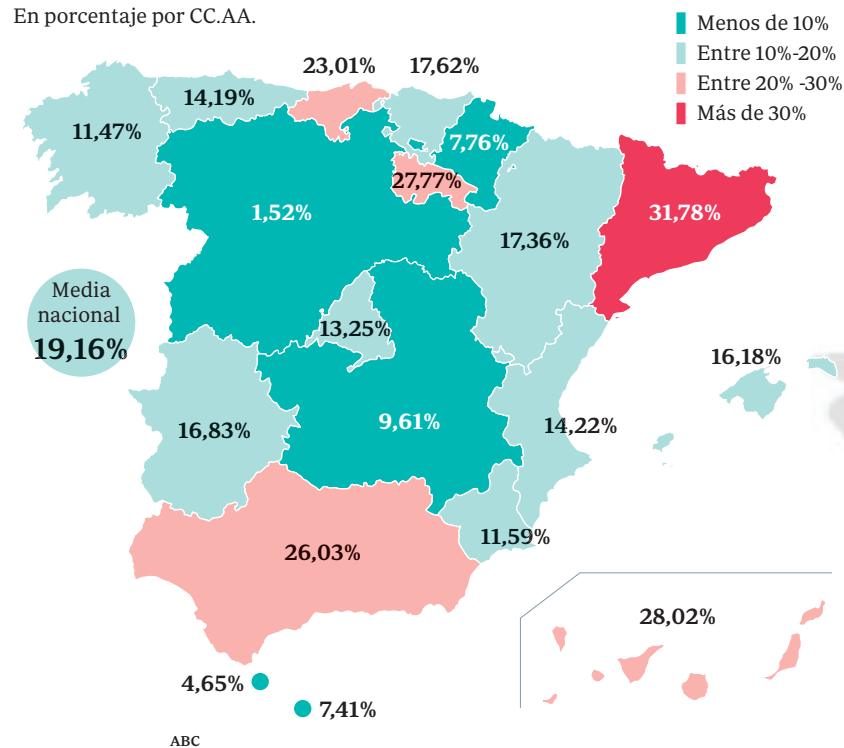
ÉRIKA MONTAÑÉS / ANNA CABEZA / MIQUEL VERA MADRID / BARCELONA

La lista de espera de personas que solicitan una prestación de dependencia está creciendo a un ritmo de 6.600 cada semestre en Cataluña. En este momento, hay unos 256.000 españoles pendientes de recibir esta asistencia y casi 75.000 están en esta comunidad, que ha pasado a ocupar la última posición de la tabla nacional, tanto en porcentaje de atención a sus personas dependientes (en los tres grados) como en cobertura de las nuevas peticiones. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, diagnóstica sin tapujos que la situación «es catastrófica». «La gestión del Govern, por desidia e impericia, es desastrosa. La Generalitat de Cataluña está abandonando a sus dependientes», afirma.

Esta dejación de funciones se justifica, en parte, dentro de la inercia de recortes que ha sufrido el presupuesto para el cumplimiento de la ley, que debe repartir al 50% las prestaciones entre el Estado y cada región. En 2012 se aplicó un «ajuste» general del 13% en estas partidas, más de 5.400 millones de euros, reprobaba Ramírez, al frente del Observatorio de la Dependencia. Se dilapidó en parte y «sigue sin recuperarse la partida inicial -dice-, por lo que va-

Personas pendientes de recibir prestación del SAAD

En porcentaje por CC.AA.



La dependencia en Cataluña

En porcentaje por CC.AA.



mos arrastrando esa situación». La entidad que encabeza Ramírez extrae sus datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imerso) para señalar que una buena parte de los grandes y severos dependientes (grado II y grado III) se concentran sobre todo en dos territorios, Andalucía y Cataluña.

Cierto es que, por volumen de población, la demanda en ambas comunidades «ha sido muy elevada, especialmente en Andalucía, que tiene el 22% de los dependientes de toda España y con un número de solicitantes muy superior al de la media nacional. Pero el ritmo en que se cubre la atención en Cataluña es insuficiente». Ramírez no excusa. «A partir de los recor-

tes, hubo autonomías que priorizaron la atención a sus mayores. Con una población envejecida, ¿quién no tiene o no va a tener un dependiente a su cargo?», se pregunta Ramírez a voz alta. Para responderse poco después: «Castilla y León cubre el 100% de las solicitudes. Es la comunidad que mejor ha hecho estos deberes. País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha lo están haciendo muy bien. Son conscientes de que les toca poner el 80% de los recursos y un 20% el Estado. La Generalitat usa el recorte estatal como «coartada», ha decidido priorizar otras cuestiones. El Govern no se ha preocupado en los últimos años por las políticas sociales», enfatiza.

No es la primera vez que Ramírez lo denuncia abiertamente. A comienzos de año acudió al Parlamento catalán a alertar a los diputados de lo que estaba ocurriendo con sus dependientes. «En lo que dure esta ponencia, habrán muerto tres personas dependientes, porque cada media hora está muriendo en España una persona dependiente que tenía derecho a la prestación por su situación personal. Un tercio de las personas fallecidas sin recibir atenciones a las que tienen derecho son catalanas, casi 10.000 catalanes en situación de dependencia fallecen al año en el limbo de la dependencia», repasa sus notas para ABC. Además, el presidente del Observa-

EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA

torio dibujó ante «sus señorías» la situación regional, negro sobre blanco: Cataluña tiene la lista de espera en dependencia más alta de todo el país, de las personas con derecho reconocido aún están a la espera de atención el 31,78% (siendo el 19,2% la media estatal). Es la región que menos beneficiarios ha incorporado porcentualmente al sistema desde 2015, solamente un 22%, la mitad de la media nacional.

En los últimos cuatro años sólo ha reducido la lista de espera en un 3,98% (-3.064 personas), cuando la del conjunto del Estado ha sido de más del 43%. Y lo más demoledor que verbalizó Ramírez, y repite en su conversación con este periódico: «Serían necesarios más de 90 años, al ritmo de reducción de la lista de espera en estos últimos cuatro años para que el sistema de atención a la dependencia en Cataluña atendiera a todas las personas que la necesitan».

Canarias, la penúltima

En España, actualmente y tras doce años de aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), un total de 1.304.312 personas están dictaminadas actualmente como dependientes. Según el Imsero, 1.083.329 son beneficiarias del servicio de dependencia, lo que representa un 80,8% del total de personas con derecho. Ese porcentaje cae en Cataluña al 68,22% a fecha 30 de junio de 2019.

«Canarias era la comunidad que siempre figuraba en la última posición, no hace bien las cosas en este terreno», remarca José Manuel Ramírez. Pero Canarias ya no figura a la cola. Ha adelantado a Cataluña. En estos momentos, hay 235.115 personas que tienen derecho a la prestación en Cataluña y solo 160.390 la reciben.

El XIX dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado en 2019 subraya que la comunidad aporta 967 millones de los 1.430 que supone la aplicación del sistema de atención a la dependencia en Cataluña y que el impacto acumulado en Cataluña del recorte aplicado al presupuesto aprobado en 2007 para dependencia ha sido de 524 millones de euros.

El informe hace un ejercicio de futuro: «Si Cataluña incrementase el nivel mínimo de financiación en 415 millones de euros, 8.723 personas más hubiesen sido atendidas».

«Tensionado»

«El sistema está tensionado», reconoce a ABC Francesc Iglesias, secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. El portavoz del Gobierno catalán señala la financiación congelada desde Madrid y también la prórroga de presupuestos de la Generalitat como causantes de la situación actual. Iglesias puntualiza que casi la mitad de los 75.000 casos que, según el Imsero es-



«Me vi en un callejón sin salida. Quise acabar con todo»

PEP DALMAU

peran prestación, ya reciben «alguna» y están en la lista porque han solicitado una revisión de su grado de dependencia.

Iglesias se esfuerza al pensar que Cataluña es una de las comunidades que mejor evolución de datos tuvo en 2018, destaca. «Nos hemos espabilado en mejorar la atención domiciliaria, aunque queda mucha inversión pendiente», remarca, al tiempo que confía en que los presupuestos autonómicos para 2020 permitan dar un «salto de calidad en recursos».

A la espera de este impulso económico, las entidades sociales se han encargado de ayudar a miles de dependientes en Cataluña. Desde Cáritas Diocesana de Barcelona explican que hay trámites que se alargan más de un año. «Para una persona que no se puede mover de la cama, doce meses de espera es muchísimo. También para los familiares que se hacen cargo de ella. A veces llegan a situaciones extremas en las que les es difícil soportar el día a día», explica a ABC la responsable del programa de gente mayor de la entidad, Carme Gargallo. Lamenta que en la capital catalana los dependientes más graves solo puedan recibir un máximo de 12 horas de ayuda doméstica semanal.

Otro problema habitual son los trámites a realizar para aumentar el «grado» de dependencia reconocido. «Estamos ante un colectivo que, más que nadie, necesita que estas cosas se hagan con agilidad», concluye.

► Gabriel ha conseguido una prestación mínima tres años después de pedirla

M. VERA
BARCELONA

Gabriel Parra es una de las miles de personas dependientes cuyas vidas se han visto casi asfixiadas, por la lentitud y la ineficacia de la administración catalana con las ayudas a la dependencia. Este vecino del barrio de la Guineueta de Barcelona sufrió un cáncer de mandíbula con 58 años. Logró vencer a la enfermedad tras 36 sesiones de radioterapia y una operación que le vació media boca. A pesar de ello, lo más duro le esperaba fuera del hospital, cuenta.

Las secuelas de su intervención, sumadas a las cataratas y los problemas de corazón que aún hoy sufre, le impiden desde hace años valerse por sí solo. Al concluir el ingreso, se sintió desamparado y entró en depresión. ¿El motivo? El abandono total que sufrió por parte de la administración, que tardó casi tres años en pagarle la prestación mínima. Hizo su solicitud en marzo de 2016 gracias a la ayuda de Cáritas, pero no empezó a cobrarla hasta 2019. «Ahora me pagan cada mes;

al principio estuvieron seis meses sin hacerme un ingreso», explica a ABC mientras muestra el papeleo que tuvo que gestionar para cobrar la prestación mínima, poco más de 200 euros mensuales que no le llegan ni para pagar a la mujer que le cocina dos ollas de puré (una de carne y otra de pescado) con las que come toda la semana.

«Sin los ahorros de mi madre, no sé que habría hecho», confiesa. Por suerte, la entidad social se hizo cargo de la ayuda que necesitaba hasta que la administración cumplió. «En 2014 tuve la idea de acabar con todo. «¿Qué leches hago yo aquí?», me pregunté. Con mis padres muertos y una hipoteca. Todo con una pensión escasa. Suerte de Cáritas», relata, emocionado.

Parra lamenta la falta de «humanidad» del Govern al tratar a personas desamparadas sin agilizar gestiones y priorizando otros gastos, a su juicio, menos relevantes. «Seis meses se pueden hacer muy largos en mi situación. Me vi en un callejón sin salida», asevera tras pedir que las ayudas a la dependencia se gestionen de forma «casi automática».

Hoy, este antiguo guardia de seguridad celebra haberse recuperado, aunque no esconde su temor ante la posibilidad de sufrir más recortes o impagos en el futuro.